

[REDACTED]
EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO DE LOS EQUIPOS DE
RADIODIFUSIÓN DONDE SE DETECTARON LAS
INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN,
OPERANDO LA FRECUENCIA DE 107.1 MHZ.
[REDACTED]

Ciudad de México, a primero de julio de dos mil dieciséis.- Visto para resolver el expediente E-IFT.UC.DG-SAN.IV.0291/2015, formado con motivo del procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, iniciado mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis y notificado el veintidós de enero del mismo año por conducto de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "IFT" o "Instituto"), en contra del propietario, y/o poseedor, y/o responsable y/o encargado de las instalaciones y equipos de radiodifusión localizados en el inmueble ubicado en [REDACTED]

Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco (donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión, operando la frecuencia de 107.1 MHz), por la probable violación a lo previsto en el artículo 66 en relación con el 75, y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo sucesivo la "LFTyR"). Al respecto, se emite la presente Resolución de conformidad con lo siguiente, y

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-SUV/132/2014 de veintisiete de octubre de dos mil catorce la Dirección General de Supervisión informó a la Dirección General de Verificación (en lo sucesivo "DGV") que derivado de una denuncia ciudadana recibida en la oficina de partes el nueve de octubre de dos mil catorce, se hizo del conocimiento de este Instituto la operación de una estación

de radiodifusión que transmitía en la frecuencia **107.1 MHz** en el Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco.

Asimismo, por oficio **DG/3443/2014-01**, recibido en el Instituto el quince de diciembre de dos mil catorce, el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, informó a este Instituto sobre la presentación de una denuncia por la operación de una estación de radio que transmitía en la frecuencia **107.1 MHz** en Tenosique, Tabasco.

En consecuencia, la "DGV" hizo una búsqueda en la infraestructura de estaciones de Frecuencia Modulada de la página de internet del Instituto con el objeto de constatar si la frecuencia **107.1 MHz** del Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, se encontraba registrada. Sin embargo no se obtuvo registro alguno. De igual manera, la DGV ordenó realizar trabajos de radiomonitorio y vigilancia del espectro radioeléctrico a la frecuencias de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM), en Tenosique, Tabasco, con la finalidad de obtener una pronta ubicación de la estación que transmitía en la frecuencia **107.1 MHz**, obteniéndose como domicilio donde presumiblemente se emitía dicha señal, el ubicado en [REDACTED] Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco.

SEGUNDO. Mediante oficio **IFT/DF/DGV-VER/2936/2015** de doce de agosto de dos mil quince, la DGV ordenó la visita de inspección-verificación **IFT/DF/DGV/699/2015** al propietario, y/o poseedor y/o responsable, y/o encargado del inmueble, instalaciones y equipos de radiodifusión que opera la frecuencia **107.1 MHz** en el domicilio ubicado en la [REDACTED] Municipio de Tenosique de Pino Suárez, Estado de Tabasco, con el objeto de "...constatar y verificar si los equipos y/o sistemas de radiodifusión y/o servicios de radiodifusión de LA VISITADA operan en la frecuencia **107.1 MHz** y en su caso si cuenta con instrumento legal vigente emitido por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que justifique su uso legal."

TERCERO. El doce de agosto de dos mil quince, en cumplimiento al oficio precisado en el numeral inmediato anterior, los C.C. Daniel Rodríguez Agonizantes y Alejo Reyes Ramírez (en lo sucesivo **LOS VERIFICADORES**) se constituyeron en el domicilio precisado, levantándose el acta de verificación ordinaria número **IFT/DF/DGV/699/2015**, en lo sucesivo el **ACTA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA**, en la cual se hizo constar que en el inmueble ubicado en [REDACTED] [REDACTED], Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, se detectaron equipos de radiodifusión operando en la frecuencia **107.1 MHz** sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente.

CUARTO. Del contenido del acta de verificación precisada en el resultando anterior, se desprende que la persona que atendió la visita dijo llamarse [REDACTED] y, bajo protesta de decir verdad señaló *"que es encargado de la estación y que los equipos son del [REDACTED] sin exhibir ningún documento para identificarse, toda vez que manifestó lo siguiente: "no tengo ninguna en este momento"*.

QUINTO. Mediante oficio **IFT/225/UC/DG-VER/5197/2015** de veinticinco de noviembre de dos mil quince, la DGV remitió al titular de la Unidad de Cumplimiento un *"Dictamen por el cual se propone el inicio de **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES** y la **DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN**, en contra del **PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR, Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN LOCALIZADOS** en el inmueble ubicado en: [REDACTED] [REDACTED] Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco (donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión, operando la frecuencia de **107.1 MHz**), por la presunta infracción del **artículo 66** en relación con el **artículo 75**, y la probable actualización de la hipótesis*

normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de la visita de inspección y verificación que consta en el Acta Verificación número IFT/DF/DGV/699/2015."

SEXTO. En virtud de lo anterior, por acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis, el Instituto por conducto del Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en contra del PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR, Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN localizados en el inmueble ubicado en: [REDACTED] Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco (donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión, operando la frecuencia de **107.1 MHz**), por presumirse la infracción al artículo 66 en relación con el 75, y la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la LFTyR, ya que de la propuesta de la DGV, se tuvieron elementos suficientes para acreditar la prestación del servicio de radiodifusión a través de la operación, uso y explotación de una vía general de comunicación (espectro radioeléctrico) consistente en la frecuencia **107.1 MHz** por parte del presunto responsable, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente, de conformidad con lo establecido en la LFTyR.

SÉPTIMO. Previo citatorio dejado el día anterior, el veintidós de enero de dos mil dieciséis, personal de este Instituto acudió al domicilio que ha quedado precisado a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionatorio, y en dicho domicilio la notificadora fue atendida por una persona de nombre [REDACTED] quien manifestó en ese acto, ser el propietario de los equipos, por lo que en tal sentido se notificó dicho acuerdo de inicio el día veintidós del mismo mes y año, concediéndole un plazo de quince días, para que en uso del beneficio de la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (en lo sucesivo la "CPEUM") y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en adelante la "LFPA") de aplicación supletoria en términos del artículo 6, fracción IV, de la LFTyR, expusiera lo que a su derecho conviniera y, en su caso aportara las pruebas con que contara.

El término concedido en el acuerdo de inicio para presentar manifestaciones y pruebas transcurrió del veinticinco de enero al dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, sin considerar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, seis, siete, trece y catorce de febrero de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos, así como el día cinco de febrero, por ser día inhábil en términos del artículo 28 de la LFPA. Asimismo, sin considerar el primero de febrero de dos mil dieciséis por encontrarse suspendidas las labores de este Instituto en términos del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba su calendario anual de sesiones ordinarias y el calendario anual de labores para el año 2016 y principios de 2017" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil quince.

OCTAVO. De las constancias que forman el presente expediente se observó que el once de febrero de dos mil dieciséis, [REDACTED] ostentándose como propietario de los bienes asegurados por **LOS VERIFICADORES** en la visita de inspección y verificación que consta en el **Acta Verificación número IFT/DF/DGV/699/2015**, presentó ante la oficialía de partes de este Instituto un escrito de manifestaciones y pruebas.

Por lo anterior, mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, notificado el veintitrés de febrero del año en curso, por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este Instituto, se tuvieron por hechas las manifestaciones y presentadas las pruebas ofrecidas. Lo anterior considerando que en su respectivo escrito no señaló domicilio dentro de la ciudad de la sede de este Instituto y en consecuencia se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el

acuerdo de inicio consistente en que si no señalaba domicilio en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 305 y 306, en relación con el 316 del CFPC, todas las notificaciones se le harían a través de las listas que se publican en la página de este Instituto.

Asimismo, se le apercibió para que en un término de cinco días hábiles: (i) exhibiera la documentación fiscal correspondiente respecto a sus ingresos acumulables durante el ejercicio dos mil catorce; (ii) exhibiera la información que se relacione y esté directamente encaminada a demostrar su dicho respecto de la enfermedad crónica que padece, y (iii) señalara un domicilio dentro de la sede del IFT, para el efecto de oír y recibir notificaciones.

Mediante oficio de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se solicitó al Administrador de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria informara a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto, si en esa entidad recaudadora existía registro respecto de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, de [REDACTED]

NOVENO. El término concedido a [REDACTED] para desahogar los requerimientos efectuados mediante el acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, transcurrió del veintitrés de febrero al primero de marzo de dos mil dieciséis. Lo anterior, sin considerar los días veintisiete y veintiocho de febrero, de dos mil dieciséis por ser sábados y domingos, en términos del artículo 28 de la LFPA.

Sin embargo, de las constancias que forman el presente expediente se observa que [REDACTED] no desahogó los requerimientos efectuados por la autoridad administrativa por lo que, mediante acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil quince, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el veintiocho de marzo del mismo año, se hizo efectivo el

apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, consistente en tener perdido su derecho en términos del artículo 288 del CFPC, resolviendo de conformidad con los elementos de convicción con que disponga la autoridad resolutora.

DÉCIMO. Mediante acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se dio cuenta con el oficio 400-01-05-00-00-2016-0811 recibido en la oficina de partes de este Instituto el dieciocho de marzo del año en curso, por medio del cual la Administración de Operaciones de Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria atendió la solicitud de información hecha por la autoridad administrativa y, en ese sentido informó que derivado del análisis efectuado a los Sistemas Institucionales con que cuenta esa autoridad fiscalizadora, se desprende que del contribuyente [REDACTED], con [REDACTED], no se localizó declaración anual correspondiente al año dos mil catorce.

En consecuencia y por así corresponder al estado procesal que guardaba el presente asunto, con fundamento en el artículo 56 de la LFPA, se pusieron a disposición de [REDACTED] los autos del presente expediente para que dentro de un término de diez días hábiles formulara los alegatos que a su derecho convinieran, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, se emitiría la Resolución que conforme a derecho correspondiera.

DÉCIMO PRIMERO. El término concedido a [REDACTED] para presentar sus alegatos transcurrió del veintiocho de abril al doce de mayo de dos mil dieciséis, sin considerar los días treinta de abril, primero, siete y ocho de mayo de dos mil dieciséis por ser sábados, domingos en términos del artículo 28 de la LFPA, así como el día cinco de mayo del año en curso, por ser día inhábil en términos del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba su calendario anual de sesiones ordinarias y el

calendario anual de labores para el año 2016 y principios de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil quince.

Sin embargo de las constancias que forman el presente expediente se advierte que [REDACTED] no presentó sus alegatos, por lo que mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo por perdido su derecho para ello y por lo tanto fue remitido el presente expediente a este órgano colegiado para la emisión de la Resolución que conforme a derecho resulte procedente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

El Pleno del Instituto es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, con fundamento en los artículos 14, 16 y 28, párrafos, décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la **CPEUM**; 1, 2, 6, fracciones II, IV y VII, 7, 15, fracción XXX, 17, penúltimo y último párrafos, 66, 75, 297, primer párrafo, 298, inciso E), fracción I, y 305 de la **LFTyR**; 523 y 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación ("**LVGC**"); 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16 fracción X, 28, 49, 50, 59, 70, fracciones II y VI, 72, 73, 74 y 75 de la **LFPA**; y 1, 4, fracción I y 6, fracción XVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones ("**ESTATUTO**").

SEGUNDO. CONSIDERACIÓN PREVIA

La Soberanía del Estado sobre el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, que es el medio en el que se propagan las señales de audio o audio y video

asociados mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones de radio y televisión se ejerce observando lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la **CPEUM**, los cuales prevén que el dominio directo de la Nación sobre el espectro radioeléctrico es inalienable e imprescriptible y que la explotación, uso o aprovechamiento de dicho recurso por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, sólo puede realizarse mediante títulos de concesión otorgados por el **IFT** de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca la normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la **CPEUM**, el **Instituto** es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, para lo cual tiene a su cargo, entre otros, la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Conforme a lo anterior, el **Instituto** es el encargado de vigilar la debida observancia a lo dispuesto en las concesiones y autorizaciones que se otorgan para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, dedicadas al servicio público de radiodifusión como vehículo de información y de expresión, a fin de asegurar que se realice de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Bajo esas consideraciones, el ejercicio de las facultades de supervisión y verificación por parte del **IFT**, traen aparejada la relativa a imponer sanciones por el incumplimiento a lo establecido en las leyes correspondientes o en los respectivos

títulos de concesión, asignaciones o permisos, con la finalidad de inhibir aquellas conductas que atenten contra los objetivos de la normatividad en la materia.

En ese sentido, la Unidad de Cumplimiento en ejercicio de sus facultades, llevó a cabo la sustanciación de un procedimiento y propuso a este Pleno imponer la sanción respectiva, así como declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación en contra [REDACTED], en su calidad de propietario de los equipos con los que se prestaba el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **107.1 MHz**, al considerar que con su conducta violó los artículos 66 en relación con el 75 y se actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la **LFTyR**.

Ahora bien, para determinar la procedencia en la imposición de una sanción, la **LFTyR** aplicable en el caso en concreto, no sólo establece obligaciones para los concesionarios y permisionarios y para los gobernados en general, sino también señala supuestos de incumplimiento específicos, así como las consecuencias jurídicas a las que se harán acreedores en casos de infringir la normatividad en la materia.

Es decir, al pretender imponer una sanción, esta autoridad debe analizar minuciosamente la conducta que se le imputa a [REDACTED] y determinar si la misma es susceptible de ser sancionada en términos del precepto legal o normativo que se considera violado.

En este orden de ideas, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el desarrollo jurisprudencial de los principios del derecho penal en el campo administrativo sancionador irá formando los principios propios para este campo del *ius puniendi* del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido considerar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal, como lo es el principio de inaplicabilidad de la analogía en materia penal o tipicidad.

En ese sentido, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal al ser manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de éstos, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, debe cuidarse el aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

Así, en la especie se considera que la conducta desplegada por [REDACTED] vulnera el contenido del artículo 66 de la propia Ley, que al efecto establece que se requiere de concesión única otorgada por el IFT para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Desde luego, el mencionado precepto dispone lo siguiente:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

Lo anterior, en relación con el artículo 75, de la LFTyR, el cual dispone que corresponde al Instituto el otorgamiento de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, para efectos de imponer la sanción que corresponda, resulta importante hacer notar que la comisión de la conducta antes referida, es susceptible de ser sancionada en términos de la fracción I, del inciso E del artículo 298, de la LFTyR, en el que se establece que la sanción que en su caso procede imponer corresponde a una multa por el equivalente al 6.01% hasta el 10% de los ingresos acumulables de la persona infractora.

En efecto, el artículo 298, inciso E), fracción I de la LFTyR, establece expresamente lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E). Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos, de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización...

Asimismo, cabe señalar que la comisión de la conducta en análisis, actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305 de la LFTyR, misma que establece que la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión trae como consecuencia la pérdida de los bienes en beneficio de la Nación. En efecto dicho precepto legal expresamente dispone:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

De lo anterior podemos concluir que el principio de tipicidad sólo se cumple cuando en una norma consta una predeterminación tanto de la infracción como de la sanción, es decir que la ley describa un supuesto de hecho determinado que permita predecir las conductas infractoras y las sanciones correspondientes para tal actualización de hechos, situación que se hace patente en el presente asunto.

Por otra parte, resulta importante mencionar que para el ejercicio de la facultad sancionadora, en el caso de incumplimiento de las disposiciones legales en materia de radiodifusión, el artículo 297, primer párrafo, de la LFTyR establece que para la

imposición de las sanciones previstas en dicho cuerpo normativo, se estará a lo previsto por la **LFPA**, la cual prevé dentro de su Título Cuarto, Capítulo Único, el procedimiento para la imposición de sanciones administrativas.

En efecto, los artículos 70 y 72 de dicho ordenamiento, establecen que para la imposición de una sanción, se deben cubrir dos premisas: i) que la sanción se encuentre prevista en la ley y ii) que previamente a la imposición de la misma, la autoridad competente notifique al presunto infractor el inicio del procedimiento respectivo, otorgando al efecto un plazo de quince días para que el presunto infractor exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Así las cosas, al iniciarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra de [REDACTED] se presumió el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, de la **LFTyR** ya que no contaba con la concesión correspondiente para la prestación del servicio público de radiodifusión, mediante el uso de la frecuencia **107.1 MHz**.

En este sentido, a través del acuerdo de inicio de procedimiento, la Unidad de Cumplimiento dio a conocer a [REDACTED] la conducta que presuntamente viola disposiciones legales, así como la sanción prevista en ley por la comisión de la misma.

Por ello, se le otorgó un término de quince días hábiles para que en uso de su garantía de audiencia rindiera las pruebas y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera. Lo anterior de conformidad con el artículo 14 de la **CPEUM**, en relación con el artículo 72 de la **LFPA**.

Concluido el periodo de pruebas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la **LFPA**, la Unidad de Cumplimiento puso las actuaciones a disposición del interesado, para que éste formulara sus alegatos.

Una vez desahogado el periodo probatorio y vencido el plazo para formular alegatos, la Unidad de Cumplimiento remitió el expediente de mérito en estado de Resolución al Pleno de este Instituto, quien se encuentra facultado para dictar la Resolución que en derecho corresponda.

Bajo ese contexto, el procedimiento administrativo de imposición de sanciones que se sustancia se realizó conforme a los términos y principios procesales que establece la **LFPA** consistentes en: i) otorgar garantía de audiencia al presunto infractor; ii) desahogar pruebas; iii) recibir alegatos, y iv) emitir la resolución que en derecho corresponda.¹

En las relatadas condiciones, al tramitarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción bajo las anteriores premisas, debe tenerse por satisfecho el cumplimiento de lo dispuesto en la **CPEUM**, las leyes ordinarias y los criterios judiciales que señalan cuál debe ser el actuar de la autoridad para resolver el presente caso.

TERCERO. HECHOS MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN Y DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN.

Mediante oficio **IFT/225/UC/DG-SUV/132/2014** de veintisiete de octubre de dos mil catorce la Dirección General de Supervisión informó a **DGV** que derivado de una denuncia ciudadana recibida en la oficialía de partes el nueve de octubre de dos

¹ Dichos principios tienen su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen la garantía de debido proceso.

mil catorce, se hizo del conocimiento de este Instituto la operación de una estación de radiodifusión que transmitía en la frecuencia **107.1 MHz** en el Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco.

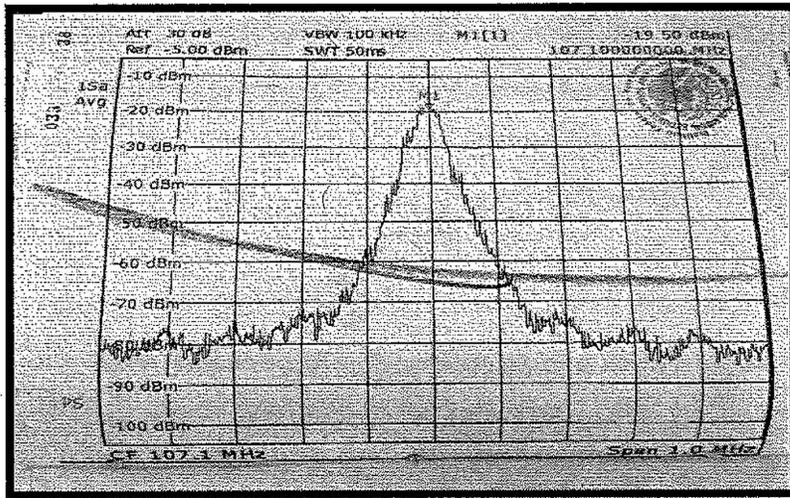
Asimismo, por oficio **DG/3443/2014-01**, recibido en el Instituto el quince de diciembre de dos mil catorce, el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, informó a este Instituto sobre la presentación de una denuncia por la operación de una estación de radio que -- transmitía en la frecuencia **107.1 MHz** en Tenosique, Tabasco.

En consecuencia, la "DGV" hizo una búsqueda en la infraestructura de estaciones de Frecuencia Modulada de la página de internet del Instituto, con el objeto de constatar si la frecuencia **107.1 MHz** del Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, se encontraba registrada. Sin embargo no se obtuvo registro alguno, por lo que la DGV ordenó realizar trabajos de radiomonitorio y vigilancia del espectro radioeléctrico a la frecuencias de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM), en Tenosique, Tabasco, con la finalidad de obtener una pronta ubicación de la estación que transmitía en la frecuencia **107.1 MHz**, obteniéndose como domicilio donde presumiblemente se emitía dicha señal, el ubicado en [REDACTED]

[REDACTED], Municipio de Tenosique, Estado de Tab

En consecuencia, la DGV ordenó la visita de inspección-verificación IFT/DF/DGV/699/2015 de doce de agosto de dos mil quince, dirigida al *"PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO DEL INMUEBLE UBICADO EN: [REDACTED] Municipio Tenosique de Pino Suárez, Estado de Tabasco Así como de las instalaciones y equipos de radiodifusión localizados en el mismo"*, por lo que el doce de agosto de dos mil quince LOS VERIFICADORES se constituyeron en dicha población donde se realizó un monitoreo de radiofrecuencia en FM, corroborando que la frecuencia **107.1 MHz** estaba siendo utilizada, obteniéndose graficas de radiomonitorio y grabación del audio

de las transmisiones. Asimismo, a través del mismo analizador de espectro, se determinó la ubicación exacta de la estación de radiodifusión que operaba dicha frecuencia.



En consecuencia, en esa misma fecha, **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en el domicilio ubicado en [REDACTED] *Municipio Tenosique de Pino Suárez, Estado de Tabasco* y levantaron el **ACTA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA** número **IFT/DF/DGV/699/2015**, dándose por terminada dicha diligencia el mismo día de su inicio.

Ahora bien, una vez que **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en el domicilio en el cual se localizó en operación la frecuencia **107.1 MHz**, solicitaron la identificación de la persona que recibió la visita, quien dijo ser [REDACTED] y quien manifestó bajo protesta de decir verdad: "que es encargado de la estación y que los equipos son del [REDACTED] (sic), sin que presentara algún documento para identificarse, bajo el argumento de que no tenía ninguno en ese momento.

Cabe señalar que la persona que recibió la visita se negó a firmar copia de la constancia de acuse de recibo de la orden de visita de inspección-verificación **IFT/DF/DGV/699/2015** toda vez que manifestó: *"que deja entrar pero que no va a firmar nada pero él lo entregara al dueño"* (sic).

Asimismo, ante la negativa la persona que atendió la diligencia para designar testigos de asistencia, **LOS VERIFICADORES** nombraron a [REDACTED] y [REDACTED] quienes aceptaron la designación como testigos de asistencia en dicha actuación.

Una vez cubiertos los requisitos de ley, **LOS VERIFICADORES**, acompañados de la persona que ocupaba el inmueble en el que se practicó la diligencia y de los testigos de asistencia, procedieron a verificar el inmueble en el que se ubica la estación de radiodifusión y encontraron instalados y en operación: un transmisor en la frecuencia **107.1 MHz** sin marca, una consola marca Yamaha, un micrófono marca Steren y un CPU armado, todos conectados a una antena para FM, tipo pata de gallo.

Posteriormente, **LOS VERIFICADORES** solicitaron a la persona que atendió la visita, manifestara bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- Que señalara qué persona es la propietaria o poseedora de la estación de radiodifusión que transmite desde ese inmueble, a lo que la persona que recibió la visita respondió: *"Es el [REDACTED]."*
- Que indicara si sabía si desde ese inmueble se estaba transmitiendo una estación de radiodifusión, la cual opera la frecuencia **107.1 MHz**, a lo que la persona que recibió la visita contestó: *"Sí, pero no sabía que no tenía permiso"*.

Por lo anterior, se le solicitó a dicha persona informara si contaba con concesión o permiso expedido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que amparara la instalación y operación de la frecuencia **107.1 MHz** ya que en términos del artículo 66 de la **LFTyR**, se requiere de concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, a lo que la visitada manifestó que no sabía; motivo por el cual **LOS VERIFICADORES** requirieron a la persona que atendió la visita que apegara y desconectara los equipos con los cuales transmitía en la frecuencia antes referida, a lo que la persona que atendió la diligencia manifestó: *"Yo lo hago, pero no quiero tener problemas"*.

En razón de que dicha persona no exhibió el respectivo título de concesión o permiso otorgado por autoridad competente que amparara o legitimara la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la frecuencia **107.1 MHz**, **LOS VERIFICADORES** procedieron al aseguramiento del equipo encontrado en el inmueble en donde se practicó la visita, quedando como interventor especial (depositario) del mismo, **RAÚL LEONEL MULHIA ARZALUZ**, quien aceptó y protestó el cargo, situación que se hizo constar en el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA**, conforme a lo siguiente:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Un transmisor	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	081
Un CPU armado	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	082
Una consola	Yamaha	Sin modelo	Sin número de serie	083
Un micrófono	Steren	Sin modelo	Sin número de serie	084
Una antena tipo pata de gallo	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	

Previamente a la conclusión de la diligencia, en términos del artículo 68 de la LFPA, **LOS VERIFICADORES** informaron a la persona que recibió la visita, que le asistía el derecho de manifestar lo que a su interés conviniera respecto de los hechos asentados en el acta de verificación, a lo que dicha persona respondió "Sólo debió decir que yo no sabía nada, de que no tuviera permiso la estación."

Dado lo anterior, **LOS VERIFICADORES** con fundamento en el artículo 524 de la LVGC notificaron a la persona que recibió la diligencia, que tenía un plazo de diez días hábiles para que en ejercicio de su garantía de audiencia presentara por escrito las pruebas y defensas que estimara procedentes ante el Instituto.

El término de diez días hábiles otorgado a la visitada para presentar pruebas y defensas en relación a los hechos contenidos en el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA** transcurrió del trece al veintiséis de agosto de dos mil quince, término que feneció sin que se presentara escrito alguno.

Derivado de lo anterior y una vez analizadas las constancias respectivas, la DGV estimó que con su conducta el probable responsable presumiblemente contravino lo dispuesto por el artículo 66 en relación con el 75, y actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, ambos de la LFTyR. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

A) Artículo 66 en relación con el 75 de la LFTyR.

El artículo 66 de la LFTyR, establece que: "*Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.*"

Por su parte el artículo 75 de la LFTyR, dispone que "*Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán*

por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título.”

En este sentido, dicha concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico es el título habilitante que otorga a su titular la legitimación para prestar servicios de radiodifusión. Sin embargo, del informe de radiomonitorio así como de las grabaciones de audio realizadas por **LOS VERIFICADORES**, se demuestra fehacientemente que el probable responsable, al momento de la diligencia, se encontraba prestando el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **107.1 MHz** de la banda de Frecuencia Modulada, en el domicilio ubicado en [REDACTED] Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, sin contar con el documento idóneo que ampare la prestación del servicio de radiodifusión.

Asimismo, con motivo del monitoreo realizado en dicho domicilio, se constató que el uso de la frecuencia **107.1 MHz** no estaba registrada a concesionario o autorizado alguno para esa entidad, dentro de la infraestructura de Estaciones de Radio **FM** publicada en la página web del Instituto.

Ahora bien, de los hechos que se hicieron constar en el **ACTA DE VERIFICACIÓN** durante el desarrollo de la visita de inspección-verificación, se desprende lo siguiente:

- a) El uso de la frecuencia **107.1 MHz**, mediante un transmisor sin marca, una consola marca Yamaha, un micrófono marca Steren y un CPU armado, todos conectados a una antena para FM, tipo pata de gallo, mismos que se encontraban instalados y en operación, con lo que se acredita el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, correspondiente a la banda de **FM**, sin contar con concesión o permiso.

- b) Del monitoreo realizado, así como de las grabaciones realizadas de la transmisión al momento de la diligencia se constata que se encontraba prestando servicios de radiodifusión mediante el uso de la frecuencia **107.1 MHz** en la banda de FM.
- c) En cuanto al cuestionamiento de **LOS VERIFICADORES** respecto a que si sabía que desde el inmueble visitado se estaba transmitiendo una estación de radiodifusión en la frecuencia **107.1 MHz**, la persona que atendió la diligencia señaló "sí, pero no sabía que no tenía permiso".

Por tanto, se acredita la infracción al artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR, toda vez que al momento de llevarse a cabo la visita de inspección-verificación, se detectó que en el inmueble visitado, se prestaba el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **107.1 MHz** de FM, sin contar con la respectiva concesión, permiso o autorización emitida por autoridad competente.

B) Artículo 305 de la LFTyR.

En lo que respecta al artículo 305 de la LFTyR, dicha disposición establece que "Las personas que presten servicios de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones".

En efecto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana, con las restricciones establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables, pero para su aprovechamiento se requiere concesión otorgada conforme a las condiciones y

requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Al respecto, durante la diligencia de inspección-verificación, **LOS VERIFICADORES**, realizaron el monitoreo de frecuencias en FM y corroboraron que la frecuencia **107.1 MHz** estaba siendo utilizada.²

Asimismo, se corroboró que el probable responsable se encontraba prestando el servicio de radiodifusión sin contar con el título de concesión, permiso o autorización respectivos. En consecuencia, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, de la **LFTyR**.

Ahora bien, en el dictamen remitido por la **DGV** se consideró que el probable responsable prestaba el servicio público de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la banda de frecuencia **107.1 MHz**, sin contar con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente y en consecuencia el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento de imposición de sanción respectivo, mismo que se procede a resolver por éste Órgano Colegiado.

Lo anterior considerando que de conformidad con los artículos 15, fracción XXX de la **LFTyR** y 41 en relación con el 44 fracción I, y 6, fracción XVII del **ESTATUTO**, el Titular de la Unidad de Cumplimiento tiene facultad para sustanciar procedimientos administrativos sancionatorios y el Pleno del Instituto se encuentra facultado para imponer las sanciones respectivas y declarar la pérdida de los bienes, instalaciones y equipos a favor de la Nación, por el incumplimiento e infracción a las

² Sobre el particular, obtuvieron gráficas de radiomonitoreo y grabaciones del audio de las transmisiones, mismas que obran en el presente expediente.

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

CUARTO. MANIFESTACIONES Y PRUEBAS.

Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/5197/2015 de veinticinco de noviembre de dos mil quince, la DGV remitió al titular de la Unidad de Cumplimiento un "Dictamen por el cual se propone el inicio de **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES** y la **DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN**, en contra del **PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR, Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN LOCALIZADOS** en el inmueble ubicado en: [REDACTED] Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco (donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión, operando la frecuencia de **107.1 MHz**), por la presunta infracción del **artículo 66** en relación con el **artículo 75**, y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el **artículo 305**, todos de la **Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión**, derivado de la visita de inspección y verificación que consta en el **Acta Verificación número IFT/DF/DGV/699/2015**."

Mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis, el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y la declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, y al momento de llevarse a cabo la notificación de dicho procedimiento, la diligencia fue atendida por [REDACTED] quien manifestó ser **propietario de los bienes asegurados** y en tal sentido se le otorgó un término de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso, aportara las pruebas con que contara con relación a los presuntos incumplimientos que se le imputaron.

Dicho acuerdo fue notificado el veintidós de enero de dos mil dieciséis por lo que el plazo de quince días hábiles transcurrió del veinticinco de enero al dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.

De acuerdo a lo señalado en el Resultando **OCTAVO** de la presente Resolución [REDACTED] con fecha once de febrero de dos mil dieciséis presentó un escrito de manifestaciones y pruebas.

En el apartado señalado con el numeral **PRIMERO** de dicho escrito señaló que:

- Es propietario de los bienes asegurados en la visita de inspección verificación IFT/DF/DGV/699/2015.
- La verificación constituye un acto nulo, pues dicha diligencia fue entendida con persona distinta a él como propietario de los bienes asegurados, lo cual lo dejó en estado de indefensión porque nunca tuvo conocimiento del procedimiento administrativo sancionatorio instaurado en su contra.

En el apartado señalado con el numeral **SEGUNDO** de dicho escrito señaló que:

- La frecuencia y equipo empleados se encuentran dentro de los estándares que no requieren concesión porque considera que estaban dedicados para servicios sociales y comunitarios dentro de la localidad municipal, además de "*no tener mucho alcance de comunicación*" y se encontraban operando en malas condiciones.

En el apartado señalado con el numeral **TERCERO** de dicho escrito señaló que:



- No usó la frecuencia para fines de lucro, ya que funcionaba con fines altruistas e informativos y promovía la participación de la población en actividades culturales y musicales.

En el apartado señalado con el numeral **CUARTO** de dicho escrito señaló que:

- No le es posible señalar sus ingresos acumulables, debido a que sufre una enfermedad crónica degenerativa (hiperglucemia diabetes mellitus dos) por lo que no laboró en ninguna institución o en algún negocio particular.

Ahora bien, a efecto de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16, de la **CPEUM**, así como con el principio de exhaustividad en el dictado de las resoluciones administrativas, de conformidad con los artículos 13 y 16, fracción X, de la **LFPA**, esta autoridad procede a estudiar y analizar en esta parte de la Resolución los argumentos presentados por [REDACTED] en el procedimiento sancionatorio que ahora se resuelve, y se aclara que éste último ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como *"el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí en forma de juicio por autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades o faltas ya sean de servidores públicos o particulares, cuya finalidad, en todo caso, sea imponer alguna sanción."*³

De la definición señalada por nuestro Máximo Tribunal se puede advertir que el objeto del procedimiento administrativo sancionador es el de conocer irregularidades o faltas, por lo que se infiere que la *litis* del mismo se sujeta únicamente a acreditar o desvirtuar la comisión de la conducta sancionable, lo

³ Engrose versión pública. Contradicción de Tesis 200/2013 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelto en sesión del 28 de enero de 2014, párrafo 45. Consultable en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx>

cual se fortalece con la imposibilidad de impugnar actos emitidos durante el procedimiento.

Por tanto, el análisis de los argumentos deberán en todo caso estar encaminados a desvirtuar las imputaciones realizadas por la autoridad, relacionadas con la comisión de las conductas presuntamente sancionables.

En consecuencia, este Pleno del IFT se pronuncia respecto de las manifestaciones presentadas por [REDACTED] en los siguientes términos:

a) Por lo que se refiere a que [REDACTED] es propietario de los bienes asegurados en la visita de inspección verificación IFT/DF/DGV/699/2015, para esta autoridad resolutora constituye una confesión expresa la cual adquiere plena eficacia convictiva y valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por entrañar una confesión espontánea.

En efecto, para los efectos de esta resolución, queda plenamente acreditado que el equipo empleado para la prestación del servicio público de radiodifusión sin contar con un título habilitante, es propiedad de [REDACTED]

b) Resulta infundado el argumento consistente en que al haberse entendido la diligencia de verificación con persona distinta a [REDACTED] lo dejó en estado de indefensión porque nunca tuvo conocimiento del procedimiento administrativo sancionatorio instaurado en su contra.

En principio debe aclararse que la normatividad que rige el procedimiento administrativo de verificación, no es aplicable al procedimiento administrativo sancionador que ahora se resuelve, por lo que el planteamiento que se atiende resulta incorrecto desde su origen. En efecto, el procedimiento de verificación se

inició con la práctica de la visita en el domicilio donde se prestaba el servicio de radiodifusión, mismo que finalizó con el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo sancionador, en razón de que éste acuerdo resolvió la situación jurídica del visitado; por su parte, el procedimiento sancionador comenzó con el acuerdo de inicio y concluye ahora con la presente resolución.

Bajo estas condiciones, es necesario señalar primeramente que tal como consta en el oficio IFT/225/UC/DG-VER/2936/2015, se ordenó notificar la orden de visita de inspección verificación conferida a LOS VERIFICADORES, al propietario, y/o poseedor, y/o responsable y/o encargado del inmueble ubicado en [REDACTED], Municipio de Tenosique de Pino Suárez, Estado de Tabasco, así como de las instalaciones y equipos de radiodifusión localizados en dicho domicilio, a efecto de que constataran y verificaran si los equipos y/o sistemas de radiodifusión y/o servicios de radiodifusión de la visitada operaban en la frecuencia 107.1 MHz y si contaba con instrumento legal que justificara su uso legal.

En ese sentido, toda vez que la visita de verificación se entendió con la persona que (i) se encontró en el domicilio precisado en la orden de visita; (ii) quien dijo ser el encargado de la estación de radiodifusión y (iii) quien manifestó que desde el inmueble visitado se transmitía una estación de radiodifusión a través de la frecuencia 107.1 MHz, dicha actuación no puede considerarse nula, ya que para su desarrollo se cumplieron con las formalidades previstas en los artículos 63 y 64 de la LFPA.

Lo anterior demuestra que el argumento expuesto por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] es infundado, en virtud de que en términos del artículo 64 de la citada LFPA, tanto los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación, están obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor, por lo que

en ese sentido, si bien es cierto que en el caso que nos ocupa la diligencia de verificación no se entendió con [REDACTED], ésta se llevó a cabo con la persona que se encontraba precisamente en el lugar a verificarse y quien manifestó bajo protesta de decir verdad, que era el encargado de los equipos que fueron motivo de dicha diligencia y a través de los cuales se transmitía una señal de radiodifusión.

A ese respecto, es importante destacar que el día doce de agosto de dos mil quince, **LOS VERIFICADORES** dejaron en poder de la persona que atendió la vista de verificación **IFT/DF/DGV/699/2015**, tanto el original del oficio número **IFT/225/UC/DG-VER/2015** -que contiene la orden de visita de inspección-verificación respectiva-, así como una copia del acta de verificación ordinaria en la que se hicieron constar los hechos ocurridos en la misma, sin que trascienda la validez de la diligencia, el hecho de que la persona con quien se entendió ésta se haya negado a firmar, toda vez que tal circunstancia se hizo constar en la propia acta, en términos de lo previsto en el artículo 66 de la **LFPA**.

Como se mencionó al principio de este argumento, resulta importante destacar que con motivo de la visita de verificación no se inició procedimiento sancionatorio alguno, ya que con la misma únicamente se dio cuenta de la conducta presuntamente contraria a la normatividad de la materia. El procedimiento sancionatorio como tal se inició con la notificación recibida por [REDACTED] el veintidós de enero de dos mil dieciséis.

En efecto, el veintidós de enero de dos mil dieciséis [REDACTED] recibió personalmente el acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis por el que se dio inicio al presente procedimiento administrativo, como se advierte del contenido de la cédula de notificación respectiva.⁴ Ahora bien, es necesario

⁴ Visible en las fojas 57 a 71 del expediente de marras.

señalar que al iniciarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra de [REDACTED], se presumió el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR ya que no contaba con la concesión correspondiente para la prestación del servicio público de radiodifusión, mediante el uso de la frecuencia 107.1 MHz por lo cual, en términos de lo dispuesto por los artículos 70 y 72 de la LFPA, la autoridad competente notificó personalmente al presunto infractor el inicio del procedimiento respectivo, otorgándole al efecto un plazo de quince días para que [REDACTED] [REDACTED] expusiera lo que a su derecho conviniera y en su caso, aportara las pruebas con que contara. Derecho que ejerció plenamente al presentar ante el Instituto, su escrito de pruebas y defensas el día once de febrero de dos mil dieciséis, por lo que en ese sentido, se ha cumplido cabalmente con el debido proceso.

Conforme a lo antes expuesto, resulta infundada su afirmación respecto a que se vulneró su derecho de audiencia y, por tanto, al de debido proceso.

Los argumentos expuestos por [REDACTED] en los numerales **SEGUNDO y TERCERO** de su escrito de pruebas y defensas son infundados e improcedentes

A este respecto, se equivoca al señalar que la frecuencia y equipos empleados se encuentran "...dentro de los estándares que no requieren concesión, por considerar que son dedicados para servicios sociales y comunitarios..."

Lo anterior es así, toda vez que la finalidad de las transmisiones y las especificaciones del equipo de transmisión no son determinantes para que, en su caso, no sea necesario contar con un título habilitante.

En efecto, de conformidad con el artículo 25 Constitucional, corresponde al Estado planear, conducir, coordinar, orientar la actividad económica nacional y llevar al

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general. Asimismo, de acuerdo con el artículo 27 Constitucional, la propiedad de las tierras, aguas superficiales, el subsuelo y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional, están comprendidos dentro de los límites que corresponden originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. El mismo artículo 27 establece también que corresponde a la Nación el dominio directo de los recursos naturales, dentro de los que se encuentra el espacio situado sobre el territorio nacional, al que pertenece el espectro radioeléctrico, el cual es inalienable e imprescriptible y su uso, aprovechamiento o explotación por los particulares podrá realizarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes correspondientes. Por su parte el artículo 42 fracción VI de nuestra Carta Magna reitera que el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional, comprenden el territorio nacional.

Además, conforme al artículo 27 de la Constitución y el artículo 7 de la LFTyR, el Instituto tiene a su cargo todo lo referente a la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 66 de la LFTyR se requerirá concesión para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión.

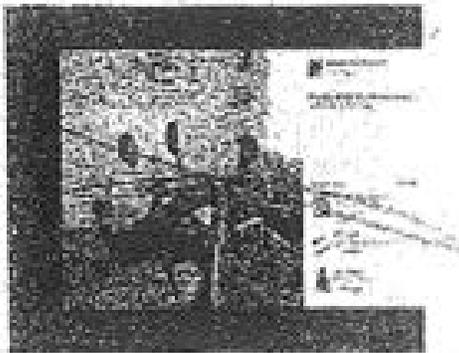
A mayor abundamiento, el artículo 67, fracción IV de la LFTyR, dispone de manera expresa que de acuerdo con sus fines, la concesión podrá ser para uso social. En este orden de ideas y en el caso que nos ocupa, una concesión para uso social, *confiere el derecho de prestar servicios de radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro.*

Por lo anterior, aun en el supuesto sin conceder que las transmisiones de radiodifusión a través de la frecuencia **107.1 MHz** se hubiesen llevado a cabo con fines sociales, comunitarios, altruistas e informativos, se requiere de una concesión otorgada por la autoridad competente conforme a los artículos 66 y 67, fracción IV de la **LFTyR**, por lo que en ese sentido, los argumentos identificados como SEGUNDO y TERCERO, del escrito de manifestaciones presentado por [REDACTED] son infundados toda vez que, conforme a la **LFTyR**, la finalidad de las transmisiones o la falta de lucro obtenido por el uso del espectro radioeléctrico no son elementos que eximan de responsabilidad a los ciudadanos para obtener el título habilitante respectivo.

En el numeral **CUARTO** de su escrito de pruebas y defensas, [REDACTED] señaló que padece de una enfermedad crónica degenerativa que le impide laborar para alguna institución o en *algún negocio particular*.

A este respecto, es necesario señalar que a pesar de que se le otorgó un plazo adicional de cinco días hábiles para que presentara elementos de prueba para acreditar su dicho, [REDACTED] omitió presentar las pruebas necesarias para sustentar su dicho. Por tanto, como se hará mención en la parte correspondiente de la presente resolución, tal circunstancia no podrá ser tomada en cuenta por esta autoridad para llevar a cabo la cuantificación de la multa que en su caso proceda.

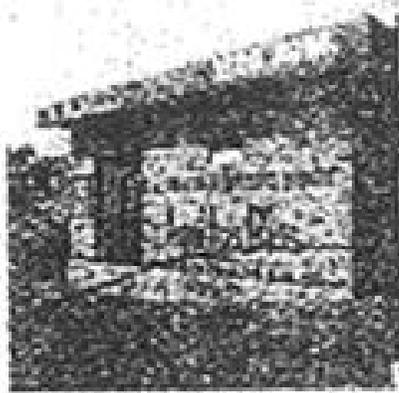
Ahora bien, [REDACTED] exhibió anexo a su escrito de pruebas y defensas, una serie de copias simples de quince fotografías que obran a fojas 75 a 89 de los autos del presente expediente, mismas que para mayor referencia se identifican a continuación:



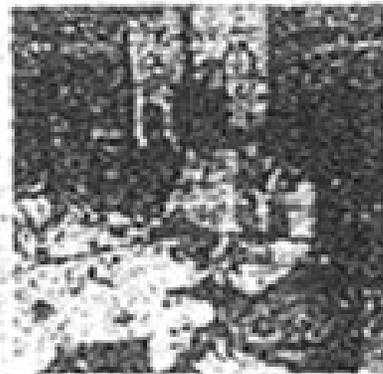
• DIFUSIÓN DE NUESTRO PRODUCTO



• APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN CULTIVO DE CAJAMA



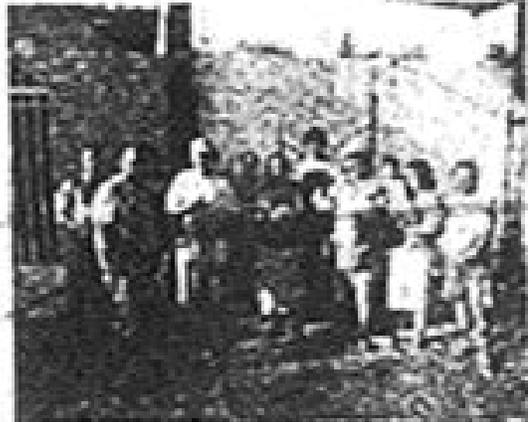
• QUÉ ENTENIA RADIO CULTURAL LA SOCAE



• EL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ZONA DE LA SOCAE
• EL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ZONA DE LA SOCAE
• EL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ZONA DE LA SOCAE



EX RECTORA DE LA MAESTRA



ENTREGA DE CANTONAS DE LOS NIÑOS
DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES



6 DE ENERO PARA LOS NIÑOS MAS POBRES



PROFESORAS ATENDIENDO RESPONSABLE DE LOS DEBIDOCS MIGRANTES
Y DE LOS MIGRANTES EN ESTA ZONA



COMPAÑEROS DE TELEVISIÓN, CANAL 9, CE
EN LAS TORRES DE ROCA DEL CERRO



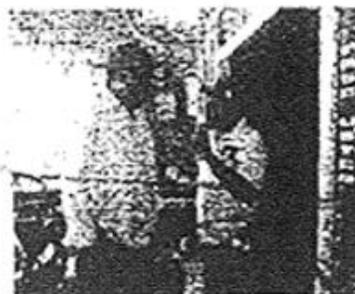
GESTIONES PARA DONAR DE RESERVA DE SOYUNGA A INSTANCIAS DEL CERRO
DE TENDÓN



ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA PARA QUIENES MENOS
TIENEN, CON LA PARTICIPACIÓN ALTRUISMA DE AMIGOS
MÉDICOS



COLABORANDO CRUZ ROJA INTERNACIONAL



RECTOR DE LA [REDACTED]



PLATICAS Y APOYOS A LA GENTE VULNER

A este respecto, del análisis al contenido de dichas fotografías, se advierte que las mismas carecen de relación inmediata con los hechos controvertidos en el presente asunto, por lo que en ese sentido, no benefician a su oferente. Lo anterior es así, en razón de que:

- El contenido de las imágenes fotográficas ofrecidas por [REDACTED] no acredita que tuviera una concesión otorgada por este Instituto que lo facultara a prestar el servicio público de radiodifusión a través de la frecuencia 107.1 MHz en el Municipio de Tenosique, Tabasco.

- Las actividades de servicio social y comunitarias descritas en las imágenes fotográficas y que aparentemente lleva a cabo [REDACTED] no le confiere derecho alguno para prestar un servicio público de radiodifusión sin concesión a través de la frecuencia 107.1 MHz, bajo el argumento de que se trata de una estación de radio comunitaria.

Asimismo, por lo que se refiere al disco compacto ofrecido por [REDACTED] se advierte que éste contiene una cápsula informativa del Municipio de Tenosique en la que se expone su ubicación, tipo de población y la problemática de tránsito de las personas que conforman dicha comunidad, cuya realización corresponde al Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, por lo cual, también carece de relación inmediata con los hechos controvertidos por lo que, en ese sentido, no beneficia a su oferente.

QUINTO. ALEGATOS

Mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, notificado al presunto infractor por lista diaria de notificaciones en la página de este Instituto el veintisiete de abril siguiente, se otorgó un plazo de diez días para que ofreciera alegatos, el cual transcurrió del veintiocho de abril al doce de mayo de dos mil dieciséis.

De las constancias que forman parte del presente expediente, se observa que para tal efecto, [REDACTED] no presentó alegatos ante este IFT.

De acuerdo a lo señalado en el Resultando Décimo Primero de la presente Resolución, por proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo por perdido el derecho de [REDACTED] para

formular alegatos de su parte con fundamento en los artículos 56 de la LFPA y 288 del CFPC.

Por lo anterior, al no existir análisis pendiente por realizar se procede a emitir la presente resolución atendiendo a los elementos que causan plenitud convictiva ante esta autoridad, cumpliendo los principios procesales que rigen todo procedimiento.

Por analogía, es útil la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396 que a su letra señala:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P.J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera,

dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.”

SEXTO. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS

En tales consideraciones, debe tomarse en cuenta que:

1. Se confirmó el uso de la frecuencia **107.1 MHz**, en el inmueble ubicado [REDACTED] Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión que operaba dicha frecuencia, con el equipo consistente en:
i) un transmisor para Frecuencia Modulada; ii) una consola marca Yamaha, iii) un micrófono marca Steren, y iv) un CPU armado, todos conectados a, iv) una antena tipo pata de gallo.
2. Se detectó la prestación del servicio público de radiodifusión y no se acreditó tener concesión o permiso que amparara o legitimara la prestación de dicho servicio.
3. Existe confesión expresa en el procedimiento sancionatorio por parte de [REDACTED], respecto de su propiedad sobre los equipos con los que se llevaban a cabo las transmisiones de la radiodifusora en la frecuencia **107.1 MHz**

En ese sentido, este Pleno del IFT considera que existen elementos probatorios suficientes para determinar que [REDACTED] efectivamente prestaba el servicio público de radiodifusión de forma ilegal, en franca violación del artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR.

Se afirma lo anterior, en virtud de que del análisis de la conducta desplegada en relación con lo establecido en los preceptos legales que se estiman transgredidos claramente se puede advertir que se surten todos los supuestos previstos por los mismos.

Así, el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación que se resuelve en contra de [REDACTED], se inició de oficio por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, y actualización de la hipótesis prevista en el artículo 305, ambos de la LFTyR, mismos que establecen:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

Artículo 75. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título."

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

Del análisis de los preceptos transcritos, se desprende que la conducta susceptible de ser sancionada es la prestación de servicios de radiodifusión sin contar con concesión o autorización emitida por la autoridad competente, por lo que con el

fin de cumplir a cabalidad con el principio de tipicidad se debe analizar si la conducta desplegada se adecua a lo señalado por la norma.

En ese sentido, con el fin de establecer lo que debe entenderse por la prestación de un servicio de radiodifusión, resulta importante considerar lo señalado por las fracciones LIV y LXV del artículo 3 de la LFTyR, mismas que señalan lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

LIV. Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello;

LXV. Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de interés general que prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica;

De lo señalado por la LFTyR se desprenden los elementos que componen el concepto de radiodifusión, mismos que deben ser analizados a la luz de la conducta desplegada para sustentar la determinación de incumplimiento.

En ese sentido las premisas del concepto de radiodifusión son las siguientes:

1. La propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado.

2. El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico atribuidas por el Instituto a tal servicio.
3. La población las puede recibir de manera directa y gratuita utilizando los dispositivos idóneos para ello.

La primera y la tercera de las premisas se encuentran plenamente acreditadas en el procedimiento administrativo en que se actúa al existir constancia en autos del disco compacto remitido como adjunto a la propuesta de inicio del procedimiento, en el cual se contienen las grabaciones realizadas al momento de realizar el monitoreo del espectro radioeléctrico, de las cuales se desprende que efectivamente se estaban transmitiendo señales de audio, mismas que pueden ser recibidas de manera directa por la población con el simple hecho de contar con el medio idóneo, que en el presente caso lo constituye un radio receptor.

De igual forma, la primera y segunda de las premisas quedaron plenamente acreditadas durante el desarrollo de la diligencia de verificación, ya que derivado del monitoreo se detectó el uso de la frecuencia **107.1 MHz** a través de un transmisor para Frecuencia Modulada; una consola marca Yamaha, un micrófono marca Steren y un CPU armado, todos conectados a una antena tipo pata de gallo, con lo que se acredita la propagación de ondas y el uso de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, de la definición de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión se desprenden los siguientes elementos:

- ✓ Son servicios de interés general.
- ✓ Son prestados por concesionarios.
- ✓ Son para el público en general.

- ✓ Tienen fines comerciales, públicos o sociales.
- ✓ Se prestan conforme a las leyes aplicables

Del análisis de dichos elementos se desprende que en el presente asunto [REDACTED] no acreditó tener el carácter de concesionario, además de que en los archivos del IFT no obra concesión o permiso otorgado para operar esa frecuencia en dicha localidad.

Adicionalmente la frecuencia utilizada para esa entidad no se encuentra registrada en la infraestructura de Estaciones de Radio de Frecuencia Modulada ("FM") publicada en la página Web del Instituto, circunstancia que por sí misma constituye un hecho notorio que pone de manifiesto que los servicios no se prestaban conforme a la ley, no obstante que se encontraban a disposición del público en general por lo detectado y grabado en el monitoreo.

Ahora bien, otro elemento que resulta importante analizar es que con independencia de la finalidad de la estación de radiodifusión, para poder prestar dicho servicio se deben de cumplir con los requisitos previstos por la Ley, esto en virtud de que como se puede advertir de lo señalado por la norma, no existe la necesidad de acreditar un uso comercial, público o social.

Así, en el presente asunto durante la Visita de Inspección-Verificación, se acreditó la prestación de un servicio público de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **107.1 MHz** con transmisor para Frecuencia Modulada; una consola marca Yamaha, un micrófono marca Steren y un CPU armado, todos conectados a una antena tipo pata de gallo y [REDACTED] no acreditó contar con concesión o permiso. Por tanto, se considera que es responsable de la violación a lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75 y de igual forma se actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305,

conducta que es sancionable en términos de la fracción I del inciso E) del artículo 298, todos de la LFTyR.

Al respecto, el artículo 298, inciso E), fracción I de la LFTyR, establece expresamente lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E. Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

(...)

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, o..."

En consecuencia, y considerando que [REDACTED] es responsable de la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **107.1 MHz**, sin contar con concesión, permiso o autorización correspondiente que lo habilite para tal fin, lo procedente es imponer la sanción que corresponda en términos del citado artículo 298, inciso E), fracción I de la LFTyR y conforme al citado artículo 305 procede declarar la pérdida de los equipos detectados durante la visita de inspección-verificación, consistentes en:

- 1) Un Transmisor para Frecuencia Modulada;
- 2) Una Consola marca Yamaha;
- 3) Un Micrófono marca Steren;
- 4) Un CPU armado, y
- 5) Una antena tipo pata de gallo.

Lo anterior, toda vez que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la Federación, el cual es un recurso limitado, que conforme a lo dispuesto en

el artículo 28 de la CPEUM, corresponde al Estado a través del Instituto salvaguardar su uso, aprovechamiento y explotación en beneficio del interés público.

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios judiciales:

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO. La Sección Primera, Apartado 1-5, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a las ondas radioeléctricas u ondas hertzianas como las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. Por su parte, el artículo 3o., fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. En ese tenor, si se relaciona el concepto de ondas radioeléctricas definido por el derecho internacional con el del espectro radioeléctrico que define la Ley Federal de Telecomunicaciones, se concluye que este último forma parte del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, sobre el que la Nación ejerce dominio directo en la extensión y términos que fije el derecho internacional conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que, como tal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana con las restricciones establecidas en las leyes y reglamentos administrativos aplicables, pero para su aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o permiso otorgados conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Época: Novena Época, Registro: 170757, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 65/2007, Página: 987"

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SU CONCEPTO Y DISTINCIÓN CON RESPECTO AL ESPECTRO ELÉCTROMAGNÉTICO. El artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de

Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación, sin guía artificial de ondas electromagnéticas, cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los tres mil gigahertz. Así, las frecuencias se agrupan convencionalmente en bandas, de acuerdo a sus características, y el conjunto de éstas constituye el espectro radioeléctrico, el cual integra una parte del espectro electromagnético utilizado como medio de transmisión para distintos servicios de telecomunicaciones, y es un bien del dominio público respecto del cual no debe haber barreras ni exclusividad que impidan su funcionalidad y el beneficio colectivo. Cabe señalar que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y las frecuencias que lo componen son las que están en el rango entre los tres hertz y los tres mil gigahertz y, en esa virtud, su explotación se realiza aprovechándolas directamente o concediendo el aprovechamiento mediante la asignación a través de concesiones.

Época: Décima Época, Registro: 2005184, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A.72 A (10a.), Página: 1129"

En ese sentido se concluye que [REDACTED] en su carácter de propietario de los equipos de radiodifusión con los que se encontraba prestando servicios de radiodifusión a través del uso del espectro radioeléctrico en la frecuencia **107.1 MHz**, en el Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva, por lo que en tal sentido es responsable de la violación al artículo 66 en relación con el 75 y lo procedente es imponer una multa en términos del artículo 298 inciso E) fracción I, todos de la **LFTyR**. De igual forma con dicha conducta se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 del mismo ordenamiento y en consecuencia procede declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes y equipos empleados en la comisión de dicha infracción.

SÉPTIMO. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN.

El incumplir con el artículo 66 en relación con el 75, ambos de la LFTyR, resulta sancionable en términos de lo previsto en el artículo 298, apartado E), fracción I de la citada Ley, que a la letra señala:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:...

E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización..."

En ese sentido, a efecto de contar con la información necesaria para emitir la determinación que en derecho correspondiera, en el acuerdo de inicio de procedimiento se solicitó a [REDACTED] que acreditara sus ingresos acumulables del ejercicio dos mil catorce para estar en posibilidad de calcular la multa correspondiente en términos de la LFTyR, sin embargo el presunto infractor no proporcionó a esta autoridad dicha información.

No es óbice que, como se mencionó en el Resultando DÉCIMO de la presente Resolución, mediante acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se dio cuenta con el oficio 400-01-05-00-00-2016-0811 recibido en la oficialía de partes de este Instituto el dieciocho de marzo del año en curso, por medio del cual la Administración de Operaciones de Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria atendió la solicitud de información hecha por la autoridad administrativa y, en ese sentido informó que derivado del análisis efectuado a los Sistemas Institucionales con que cuenta esa autoridad fiscalizadora, se desprende que del contribuyente [REDACTED], con RFC [REDACTED], no se localizó declaración anual correspondiente al año dos mil catorce.

En ese sentido, al no contar con la información solicitada, a efecto de determinar el monto de la multa, resulta procedente acudir al mecanismo establecido en el artículo 299, párrafo tercero, fracción IV, de la LFTyR, que establece:

"Artículo 299. En el caso de infractores que, por cualquier causa, no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta o que habiéndoseles solicitado no hubieren proporcionado la información fiscal a que se refiere el artículo que antecede se les aplicaran las siguientes multas siguientes:

IV. En los supuestos del artículo 298, incisos D) y E), multa hasta por el equivalente a ochenta y dos millones de veces el salario mínimo.

Para calcular el importe de las multas referidas en razón de días de salario mínimo, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal del día que se realice la conducta o se actualice el supuesto.

(Énfasis añadido)

Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar la multa que en derecho corresponda, esta autoridad debe atender a lo establecido en el artículo 301 de la LFTyR, que a la letra señala:

"Artículo 301. Para determinar el monto de las multas establecidas en el presente Capítulo, el Instituto deberá considerar:

I. La gravedad de la infracción;

II. La capacidad económica del infractor;

III. La reincidencia, y

IV. En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse."

Para estos efectos, esta autoridad considera que de conformidad con las disposiciones referidas y en atención al principio de exacta aplicación de la ley, la sanción que en todo caso se imponga debe ser congruente con el análisis que se efectúe conforme a los elementos precisados en el precepto legal antes indicado,

De esta manera, al encontrarse establecidas por el legislador el conjunto de reglas encaminadas a individualizar el monto de la sanción aplicable por la comisión de la conducta y al no existir norma alguna que obligue a adoptar algún procedimiento en específico para la cuantificación de la multa, la autoridad puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para esos efectos gozando de un cierto grado de discrecionalidad para determinarla, siempre y cuando se motive de manera adecuada el grado de reproche imputado al inculpado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. De conformidad con los artículos 70 y 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el Juez deberá individualizar la pena, dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la discrecionalidad de la que goza aquél para cuantificar las penas esté sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que va de una culpabilidad mínima a una máxima, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quantum de la pena resulta congruente con el grado de reproche del inculpado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros. Para lograr tal fin, el juzgador puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe norma alguna que lo constriña a adoptar algún procedimiento matemático en específico, entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor.

Época: Novena Época, Registro: 176280, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 157/2005, Página: 347"

(Énfasis añadido)

En ese sentido, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley, esta autoridad procede a analizar cada uno de los elementos que se deben de tomar en consideración para estar en posibilidad de determinar el monto de la sanción que se debe aplicar.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que si bien es cierto el artículo 301 de la LFTyR, establece como elementos a considerar para efectos de fijar el monto de la multa los siguientes: a) La gravedad de la infracción; b) La capacidad económica del infractor; c). La reincidencia; y d), en su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio; de los mismos solo resultan atendibles para la fijación primigenia de la multa los dos primeros, es decir, la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor; no así la reincidencia y el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento, lo anterior en virtud de que en tratándose de la reincidencia, la misma es un factor que en términos del artículo 300 de la LFTyR, permitiría duplicar la multa impuesta para el caso de que se actualizara dicha figura, lo que implica que de suyo no es un factor que incida en la determinación de la multa, sino que opera como una agravante para imponer una sanción más severa para quien ha vuelto a infringir la normatividad de la materia; en tanto que, a contrario sensu, en caso de actualizarse el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento, permite contar con una atenuante que traería como consecuencia la disminución en el monto de la sanción originalmente decretada.

Así las cosas y conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado estima procedente llevar a cabo el análisis de la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor como factores para determinar el monto de la sanción a imponer, ejercicio que se realiza como sigue:

I. Gravedad de la infracción.

La LFTyR no establece medio alguno para determinar la gravedad. En consecuencia, esta autoridad considera conveniente que para determinar cuándo una conducta es grave y en qué grado lo es, es necesario analizar los siguientes elementos:

- D) Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse.
- ii) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- iii) Obtención de un lucro o explotación comercial de la frecuencia
- iv) Afectación a un sistema de telecomunicaciones o radiodifusión previamente autorizado.

Antes de entrar al análisis de los citados elementos, resulta oportuno destacar que los servicios de radiodifusión son considerados servicios públicos de interés general, tanto por la **CPEUM** como por los criterios sostenidos por el Poder Judicial Federal.

En efecto, de acuerdo con el artículo 6o., apartado B, fracción III, de la **CPEUM**, la radiodifusión es un servicio público de interés general y corresponde al Estado garantizar que sea prestado en condiciones de competencia y calidad.

"Artículo 6o.

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución."

(Énfasis añadido)

De igual forma lo definió la **SCJN** en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, donde consideró a la radiodifusión en general como una actividad de interés público, tal como se observa de la siguiente transcripción:

"Se desprende de los artículos transcritos, que los servicios de radio y televisión se consideran como una actividad de interés público..."

La importancia de los servicios públicos radica, entre otros motivos, en que una afectación a su prestación implica necesariamente un daño a la colectividad, por lo que el poder público, dirigido a su fin de bien común, busca ante todo garantizar la correcta prestación de tales servicios.

De lo anterior se desprende la importancia que reviste para el Estado, tanto el uso eficiente de un bien de dominio público de la Nación, como lo es el espectro radioeléctrico, como la prestación de un servicio público de interés general, como en la especie lo es el servicio público de radiodifusión, cumpliendo al efecto con las disposiciones establecidas tanto en la **CPEUM** como en la **LFTyR**.

Por lo anterior, el monto de la multa que se imponga debe guardar relación con la naturaleza de la infracción atendiendo al bien jurídico tutelado, que en el presente caso es el uso de un bien de dominio público de la Nación de manera eficiente y la prestación de un servicio público de radiodifusión.

Así, el hecho de que la **CPEUM** y la **LFTyR** exijan que se otorgue una concesión para prestar el servicio público de radiodifusión, obedece a que el mismo, al ser un recurso natural limitado, se encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación, correspondiendo al Estado su rectoría.

En ese sentido, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para la expedición de la **LFTyR** en relación con la gravedad de las infracciones señaló lo siguiente:

"En el título correspondiente a sanciones, se clasifican las conductas infractoras en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas. En apartado por separado, se clasifican las conductas que ameritan la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

Asimismo, el Dictamen emitido por la Cámara revisora en relación con la citada iniciativa señaló lo siguiente:

"De acuerdo con el mandato constitucional, la ley deberá contemplar un sistema efectivo de sanciones, para ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron adoptar primordialmente un sistema de sanciones basado en porcentajes de ingresos, como ha sido apuntado. En la Minuta se reconoce que existen conductas que deben ser sancionadas de manera diferenciada a fin de que la sanción logre su efectividad, es decir, ser ejemplar y al mismo tiempo disuadir al infractor, por ello, se establecieron para algunos casos sanciones basadas en salarios mínimos y para otros sanciones con base en los ingresos que se obtuvieron adicionalmente, por causa de la comisión de la infracción e incluso, en algunos casos se prevé la posibilidad del apercibimiento. Con respecto a los porcentajes de sanción, en la Iniciativa se establece un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende que fue intención del Legislador establecer en la LFTyR un sistema de graduación de las conductas de la más leve a la más grave, por lo que en tal sentido resulta evidente que la multa que se pretenda imponer debe ser congruente con dicha estimación.

Hechas las anteriores precisiones, esta autoridad procede a analizar los componentes que determinan la gravedad de la conducta susceptible de ser sancionada.

i) **Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse.**

Si bien en el presente caso no se acredita un daño como tal al Estado, entendido éste como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio del Estado como consecuencia del incumplimiento de una obligación, en el presente caso el Estado resiente un perjuicio, en virtud de que dejó de percibir ingresos por el otorgamiento

de una concesión que permitiera la prestación de servicios de radiodifusión de forma regular. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

En términos de lo establecido en el artículo 173 de la Ley Federal de Derechos, se deben cubrir al Estado por concepto de derechos una cuota por el otorgamiento de concesiones para establecer estaciones de radiodifusión sonora la cantidad de \$29,582.17 (veintinueve mil quinientos ochenta y dos pesos 17/100 M.N.):

En ese sentido resulta evidente que en el presente asunto sí se causa un perjuicio patrimonial al Estado, en virtud de que éste dejó de percibir el pago de los derechos correspondientes por el otorgamiento de la concesión respectiva para la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso o explotación de un bien del dominio público de la Federación, que en este caso lo es el espectro radioeléctrico.

Lo anterior, ya que corresponde de manera originaria al Estado el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y éste puede permitir dicha actividad a los particulares a través de una concesión. Ahora bien para el otorgamiento de dicha concesión, el Estado lo hace a través del ejercicio de una función de derecho público y en consecuencia le corresponde a éste recibir el pago de derechos respectivo.

Bajo esta misma premisa, resultaría procedente calcular lo que el Estado dejó de percibir por el pago de derechos anual por el uso del espectro para frecuencias de radiodifusión en términos de la ley de la materia, sin embargo en el presente asunto no existen elementos objetivos que permitan determinar con exactitud el tiempo que ha venido haciendo uso de la frecuencia el infractor y en consecuencia no se puede hacer el cálculo respectivo.

Adicionalmente, cabe destacar que dentro del presente análisis se podría considerar como daño la afectación que pudieran sufrir en su caso el mercado, los consumidores o bien la competencia en el sector de radiodifusión, sin embargo en el presente asunto no se identifica que se haya producido el mismo.

Lo anterior considerando que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población en donde se localizó el origen de la señal es una zona semi-urbana de aproximadamente 58,960 habitantes⁵ y no se tiene dato alguno que permita identificar tal afectación.

ii) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

Del análisis de los autos que integran el presente expediente, se advierte que [REDACTED] era el propietario y responsable del equipo con el cual se prestaba el servicio de radiodifusión, así como el hecho de que al llevarse a cabo la visita, la persona que atendió la misma manifestó que sí tenía conocimiento que desde dicho inmueble se estaba transmitiendo una estación de radiodifusión, la cual operaba la frecuencia **107.1 MHz**.

Con lo anterior y habiéndose acreditado la indebida prestación del servicio público de radiodifusión sin contar con el documento habilitante que lo autorice para ello, se puede presumir la intencionalidad en la comisión de la conducta, pues existen elementos suficientes que desvirtúan la presunción de inocencia a su favor que debe regir en todo procedimiento sancionador.

Por lo anterior, se considera que existen elementos suficientes para acreditar el carácter intencional de la conducta aquí sancionada.

iii) Obtención de un lucro o explotación comercial de la frecuencia

⁵ Fuente: 2010 INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010.

Del análisis de las constancias que obran en el expediente respectivo, no se desprende la existencia de una explotación comercial de la frecuencia que se detectó en operación, ya que no se cuenta con elementos de convicción que evidencien que [REDACTED] al prestar el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 107.1 MHz, presta servicios de publicidad o que como parte de su programación se incluyan comerciales pagados, y en este sentido se estima que no existe lucro ni explotación comercial de su parte, respecto del uso de la frecuencia 107.1 MHz.

iv) **Afectación a un sistema de telecomunicaciones o radiodifusión previamente autorizado.**

En el presente caso y derivado de la consulta que la autoridad administrativa realizó al Registro Público de Concesiones de este Instituto, se advierte la existencia de sistemas de radiodifusión legalmente instalados en el Municipio de Tenosique Tabasco. Sin embargo, no se desprende que con motivo de la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 107.1 MHz, [REDACTED] [REDACTED] afecta dichos sistemas de radiodifusión, por lo que tal elemento no se considera actualizado en el presente caso.

Ahora bien, una vez analizados los elementos que integran el concepto de gravedad se considera que la conducta que se pretende sancionar es **MEDIANAMENTE GRAVE** de conformidad con lo siguiente:

- ✓ Existe la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso del espectro radioeléctrico sin contar con la concesión correspondiente.
- ✓ Quedó acreditado el carácter intencional de la conducta.
- ✓ No se acredita la obtención de un lucro o la explotación comercial de la frecuencia de radiodifusión.

- ✓ No se detectó la afectación a sistemas de telecomunicaciones o radiodifusión legalmente instalados.

En efecto, del análisis de los elementos antes referidos se desprende que la conducta del infractor reviste determinada gravedad en virtud de que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la Federación de naturaleza escasa, cuyo uso, aprovechamiento y explotación solo es posible a través del otorgamiento de una concesión. En tal sentido, el Estado Mexicano ha tenido a bien encomendar al Instituto regular el uso, aprovechamiento y explotación de dicho espectro con el objeto de que su utilización por parte de los particulares, como es el caso de [REDACTED], sea llevada a cabo bajo condiciones de igualdad y previo cumplimiento de los requisitos que al efecto establezca la ley, no siendo dable ni permisible que los particulares de manera arbitraria e ilegal hagan uso indiscriminado de dicho espectro en perjuicio de quienes observan la legislación en la materia; de ahí que ese uso indiscriminado y en contravención de la normativa estime como reprochable por la legislación aplicable y en consecuencia deba ser sancionado. No obstante al momento de determinar la gravedad de la conducta esta autoridad toma en cuenta que no se acreditó la obtención de un lucro o la explotación comercial de la frecuencia de radiodifusión por parte del presunto responsable; que no se produjo un daño a los mercados o a los consumidores, así como que tampoco se advirtió la afectación o generación de interferencias perjudiciales a sistemas de telecomunicaciones o de radiodifusión legalmente instalados.

II. Capacidad económica del infractor.

Como ya fue señalado en apartados precedentes de la presente resolución, [REDACTED] no presentó elementos que permitan establecer su capacidad económica.

Siendo importante destacar que para que esta Autoridad estuviera en posibilidad de tomar en cuenta de manera exacta e inequívoca la capacidad económica real del infractor, debía ser éste quien exhibiera dentro del procedimiento que se resuelve las pruebas necesarias para ello, pues el hecho de que esta Autoridad infiera su capacidad económica con base en presunciones, o determine el monto de la sanción a imponer sin poder establecer la capacidad económica [REDACTED] [REDACTED] deviene de la omisión del propio infractor de aportar los comprobantes fiscales que demostraran sus ingresos acumulables durante el ejercicio fiscal de dos mil catorce.

En tal virtud, no existen elementos objetivos que permitan a esta autoridad determinar la capacidad económica del infractor, sin embargo dicha circunstancia es atribuible al infractor habida cuenta de que esta autoridad le dio la oportunidad de que se pronunciara al respecto así como para que proporcionara la documentación fiscal correspondiente.

Dicho criterio ha sido sostenido por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión al resolver los juicios de amparo 1637/2015 y 4/2016, promovidos en contra de resoluciones similares emitidas por este órgano colegiado.

No es óbice de lo anterior, la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria a través del oficio 400-01-05-00-00-2016-0811 por medio del cual informó a este Instituto que no se localizó declaración anual de 2014 a nombre de [REDACTED]

III, Reincidencia

De los registros que obran en el Instituto se constata que [REDACTED] [REDACTED] al momento de cometer la infracción que se sanciona en el presente

procedimiento administrativo, no tiene antecedentes de haber incurrido en alguna violación a las disposiciones de la Ley, que hubiera sido sancionada por el propio Instituto, por lo que esta autoridad en el caso que nos ocupa no considera que se acredite el supuesto en análisis.

CUANTIFICACIÓN

Una vez analizados los elementos previstos en la ley de la materia para individualizar una multa, se procede a determinar el monto de la misma en atención a las siguientes consideraciones:

El monto de la multa que en su caso se imponga debe tener como finalidad inhibir la comisión de este tipo de infracciones, siendo ésta una de las razones que motivaron la Reforma Constitucional en la materia.

Al respecto, resulta importante tener en consideración lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a dicha Reforma en la que expresamente se señaló lo siguiente:

"En consistencia con las atribuciones que se otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se establecen las bases a las que deberá ajustarse el régimen de concesiones. Las adiciones propuestas tienen por objeto asegurar que en el otorgamiento de concesiones se atienda al fin de garantizar el derecho de acceso a la banda ancha y a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones en condiciones de competencia, pluralidad, calidad y convergencia, y optimizando el uso del espectro radioeléctrico.

El régimen de concesiones debe estar basado en una política de competencia efectiva que permita alcanzar en el mediano plazo una cobertura universal así como las mejores condiciones posibles de calidad y precio en los productos y servicios. Se entiende así que la competencia en el sector constituye un instrumento central para asegurar el acceso a las tecnologías de la información y además, en su caso, permite al Estado corregir las fallas de mercado.

En concreto, se propone lo siguiente:

La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

De lo señalado en la transcripción anterior se desprende la intención del Constituyente de prever que la LFTyR establezca un esquema efectivo de sanciones con el fin de que la regulación que se emita en la materia sea efectiva.

Al respecto cabe señalar que como antecedente de la Reforma aludida, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ("OCDE") realizó un estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, el cual en la parte que interesa señaló lo siguiente:

"Se debe facultar a la autoridad reguladora para que imponga multas significativas que sean lo bastante elevadas (mucho más altas que las actuales) para que resulten disuasorias y garanticen la observancia de la regulación vigente, así como el cumplimiento de sus objetivos. También debe tener suficientes facultades para requerir información a las empresas a fin de cumplir con sus obligaciones, así como para sancionar a aquellas que no respondan a los requerimientos razonables.

Una limitación importante en el uso de concesiones para controlar el comportamiento es el tipo de sanción. En México, la LFT prevé que el incumplimiento de los términos de una concesión podría llevar a la revocación de la concesión y al cese de operaciones. Ésta no es una opción realista. De hecho, sería difícil encontrar un ejemplo de tales sanciones en toda la OCDE. Es preciso reformar la ley para permitir la imposición de formas intermedias de sanción financiera lo suficientemente elevadas para que sean disuasivas. Las reformas a la ley también podrían permitir la separación funcional y/o estructural de un incumbente con poder de mercado como sanción por el reiterado incumplimiento, como ha ocurrido en algunos países de la OCDE (p. ej. Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Australia, Nueva Zelanda). La LFT, en la actualidad, establece disposiciones para sancionar a quienes violen sus preceptos. Las multas que pueden imponerse hoy día son muy bajas: fluctúan desde "2 000 a 20 000 salarios mínimos" diarios para violaciones menores, hasta "10 000 a 100 000 salarios mínimos" por transgresiones mayores, como el incumplimiento de obligaciones relativas a la interconexión. Con un salario mínimo diario de 59.82 pesos en la ciudad de México, la sanción máxima que podría imponerse sería de unos 500 000 dólares. Es obvio que las sanciones deben ser proporcionales a la infracción."

Congruente con lo anterior, en la referida Reforma el Constituyente consideró necesario que la ley de la materia estableciera un esquema efectivo de sanciones, no sólo en cuanto a los procesos para su imposición, sino también en relación con los montos de las mismas, al considerar que las existentes no eran suficientes para disuadir las conductas infractoras y garantizar la observancia de la LFTyR.

En ese sentido, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para la expedición de la LFTyR, en relación con el esquema de sanciones señaló lo siguiente:

"El artículo 28 constitucional recién reformado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, prevé que la ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del Título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

Para cumplir este mandato constitucional, la iniciativa que se presenta a esta soberanía, propone un esquema de sanciones basados en porcentajes de ingresos de los infractores a fin de homologarlo con el esquema de sanciones establecido en la Ley Federal de Competencia Económica.

Los porcentajes de ingresos permiten imponer sanciones de manera equitativa, ya que la sanción que se llegue a imponer, incluso la máxima, será proporcional a los ingresos del infractor, lo que evita que llegue a ser ruinosa. En un esquema de sanciones basados en salarios mínimos, se corre el riesgo que al momento de imponer la sanción, ésta llegue a ser de tal magnitud que pueda exceder incluso, los ingresos del infractor.

Las sanciones por porcentajes de ingresos evitan la posibilidad de excesos en el cálculo del monto de la sanción y al mismo tiempo cumplen su función de ser ejemplares a fin de inhibir la comisión de nuevas infracciones.

Para establecer este tipo de sanciones, es menester contar con la información de los ingresos del infractor, es por esto que se establecen la facultad de requerir al infractor de tal información con apercibimiento que de no proporcionarlo se optará por un esquema de salarios mínimos, el cual también se contempla.

El esquema de salarios mínimos solo aplicará en el caso que no se cuente con la información de los ingresos del infractor.

En el título correspondiente a sanciones, se clasifican las conductas infractoras en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas. En apartado por separado, se clasifican las conductas que ameritan la revocación de la concesión.
(Énfasis añadido)

Asimismo, el Dictamen emitido por la Cámara revisora en relación con la citada Iniciativa señaló lo siguiente:

"De acuerdo con el mandato constitucional, la ley deberá contemplar un sistema efectivo de sanciones, para ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron adoptar primordialmente un sistema de sanciones basado en porcentajes de ingresos, como ha sido apuntado. En la Minuta se reconoce que existen conductas que deben ser sancionadas de manera diferenciada a fin de que la sanción logre su efectividad, es decir, ser ejemplar y al mismo tiempo disuadir al infractor, por ello, se establecieron para algunos casos sanciones basadas en salarios mínimos y para otros sanciones con base en los ingresos que se obtuvieron adicionalmente, por causa de la comisión de la infracción e incluso, en algunos casos se prevé la posibilidad del apercibimiento. Con respecto a los porcentajes de sanción, en la Iniciativa se establece un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

De lo señalado en los procesos legislativos transcritos se advierten las premisas que tomó en consideración el legislador al emitir las disposiciones que regulan la imposición de sanciones en la materia, entre las que destacan las siguientes:

- Establecer un esquema efectivo de sanciones.
- Que las sanciones cumplan con la función de inhibir la comisión de infracciones.
- Que sean ejemplares.
- Que atiendan primordialmente al ingreso del infractor.
- La propia LFTyR contenga una graduación de las conductas.

- Que las multas sean mayores a las que establecía la legislación anterior la cual no cumplió con los fines pretendidos.
- El esquema de salarios mínimos se estableció para el caso de no contar con la información de los ingresos del infractor.

Así, al no contar con la información fiscal del infractor se debe aplicar el esquema basado en salarios mínimos, el cual permite a la autoridad sancionadora determinar el monto de la multa atendiendo a los elementos establecidos en la propia LFTyR.

No pasa desapercibido para esta autoridad que al día en que se emite la presente resolución ya se encuentran vigentes el *"DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México"* y el *"DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo"*, los cuales hacen referencia a la Unidad de Medida y Actualización y al cambio de denominación de la Ciudad de México, sin embargo al tratarse de una conducta consumada antes de su entrada en vigor, en acato al principio de irretroactividad de la Ley se aplicaron las disposiciones tal y como se encontraban establecidas al momento en que se cometió la conducta.

En ese orden de ideas, resulta importante tener presente que por la comisión de la conducta aquí sancionada, la abrogada Ley Federal de Radio y Televisión establecía en su artículo 103, multa de cinco mil a cincuenta mil pesos, por lo que con la intención de cumplir con los fines de la Ley y la Reforma señalada, el monto que se debe considerar en el presente asunto por la simple comisión de la conducta atendiendo a la gravedad de la misma debe ser superior a lo previsto por la abrogada Ley.



Así es, como fue analizado en páginas precedentes, la conducta sancionada se hace consistir en la prestación de un servicio público de radiodifusión, a través del uso de un bien de dominio público de la Nación como lo es el espectro radioeléctrico, sin contar con concesión alguna, situación que pone de manifiesto la gravedad de la conducta. No obstante lo cual y de acuerdo a las circunstancias particulares del presente caso, se consideró a la misma como MEDIANAMENTE GRAVE, en virtud de que no se acreditó la obtención de un lucro o la explotación comercial de las frecuencias de radiodifusión, ni se determinó la afectación a sistemas de telecomunicaciones o de radiodifusión legalmente autorizados.

Adicionalmente, para el cálculo de la multa respectiva resulta importante considerar que con dicha conducta se produjo un perjuicio al Estado, en virtud de que este dejó de percibir ingresos por el pago de derechos por el otorgamiento de una concesión y, en su caso, por el uso del espectro.

Ahora bien, a efecto de determinar el monto de la multa que resulta aplicable en el presente asunto, hay que tomar en cuenta que como ha quedado señalado en párrafos precedentes, al desconocer los ingresos del presunto infractor, conforme al artículo 299 de la LFTyR, esta autoridad podrá imponer una multa de hasta 82 millones de veces el salario mínimo.

En tal sentido, esta autoridad debe tomar en consideración el momento en que se concretó la conducta que se pretende sancionar para determinar el Salario Mínimo General Diario Vigente ("SMGDV"), que se utilizará para el cálculo y determinación de la misma.

Sentado lo anterior, de conformidad con el último párrafo del artículo 299 de la LFTyR, esta autoridad debe considerar el SMGDV en el Distrito Federal del día en que se realice la conducta o se actualice el supuesto, que en la especie es el año dos mil quince, correspondiendo para dicha anualidad un salario que ascendió a

la cantidad de **\$70.10** (Setenta pesos 10/100 M.N.), tomando como base el resolutivo segundo de la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2015", publicado en el DOF el veintinueve de diciembre de dos mil catorce.

Por lo anterior, esta autoridad tomando en cuenta los elementos analizados, en relación con la conducta realizada por la infractora, atendiendo a los motivos y fundamentos que han quedado expuestos a lo largo de la presente resolución y considerando que el monto de la multa debe ser suficiente para corregir su comisión y para inhibirla en lo futuro, procede a imponer a [REDACTED] una multa por mil días de **SMGV** que ascienden a la cantidad de **\$70,100.00** (Setenta mil cien pesos 00/100 M.N.), por prestar el servicio público de radiodifusión sin contar con la concesión correspondiente y con ello usar frecuencias del espectro radioeléctrico.

En relación con lo anterior, es de resaltar que esta autoridad goza de arbitrio para fijar el monto de la multa, atendiendo a lo establecido en los artículos 299, párrafo tercero, fracción IV, y 301 de la LFTyR.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes:

"MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable.

(Época: Novena Época, Registro: 186216, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/20, Página: 1172)".

Ahora bien, en virtud de que [REDACTED] no cuenta con la concesión a que se refiere el artículo 66 de la LFTyR para prestar servicios públicos de radiodifusión, se actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305 de la LFTyR.

En efecto, el artículo 305 de la LFTyR, expresamente señala:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

(Énfasis añadido)

En tal virtud, procede declarar la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dicha infracción consistentes en: a) un transmisor para Frecuencia Modulada; b) una Consola marca Yamaha; c) un micrófono marca Steren y d) un CPU armado, que se encontraron conectados a; e) una antena tipo pata de gallo; habiendo designando como interventor especial (depositario) de los mismos al C. Raúl Leonel Mulhia Arsaluz, por lo que una vez que se notifique la presente resolución en el domicilio de [REDACTED] se deberá solicitar al interventor especial (depositario) ponga a disposición los equipos asegurados.

En virtud de que quedó plenamente acreditado que [REDACTED] incumplió con lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75 de la LFTyR, y que en consecuencia se actualizó la hipótesis del artículo 305 del citado ordenamiento, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

RESUELVE

PRIMERO. [REDACTED] en su carácter de propietario de los equipos de radiodifusión localizados en el inmueble ubicado en [REDACTED] Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, es responsable de la violación a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al haberse detectado que en dicho inmueble se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión a través de la frecuencia **107.1 MHz** sin contar con concesión, permiso o autorización otorgado por la autoridad competente, tal como quedó debidamente demostrado en la presente Resolución.

SEGUNDO. De conformidad con lo señalado en las Consideraciones CUARTA, QUINTA, SEXTA y SÉPTIMA de la presente Resolución se impone [REDACTED] una multa por mil días de **SMGDV** que asciende a la cantidad de **70,100.00** (Setenta mil cien pesos 00/100 M.N.), por incumplir lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que prestaba el servicio público de radiodifusión sin contar con la concesión correspondiente.

TERCERO. [REDACTED] deberá cubrir ante la Oficina del Servicio de Administración Tributaria que por razón de su domicilio fiscal le corresponda, la multa impuesta dentro del plazo de treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente Resolución, en términos del artículo **65** del Código Fiscal de la Federación.

CUARTO. Gírese oficio a la autoridad exactora, a fin de que si la multa no es cubierta dentro del término de ley, con fundamento en el artículo **145** del Código Fiscal de la Federación, proceda a hacer efectivo el cobro de la misma.

QUINTO. De conformidad con lo señalado en las Consideraciones TERCERA, CUARTA y QUINTA de la presente Resolución, y toda vez quedó acreditada la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **107.1 MHz** en la población de Tenosique, Tabasco, con fundamento en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se declara la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes y equipos empleados en la comisión de dicha infracción consistentes en:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Un transmisor	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	081
Un CPU armado	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	082
Una consola	Yamaha	Sin modelo	Sin número de serie	083
Un micrófono	Steren	Sin modelo	Sin número de serie	084
Una antena tipo pata de gallo	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	

SEXTO. Se instruye a la Unidad de Cumplimiento, para que a través de la Dirección General de Verificación, informe al depositario que deberá poner a disposición de dicha Unidad Administrativa los bienes que pasan a poder de la Nación, en términos de la presente Resolución.

SÉPTIMO. Con fundamento en el artículo 35, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena que la presente Resolución se notifique a [REDACTED] en el domicilio precisado en el proemio de la presente Resolución.

OCTAVO. En términos del artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se informa a [REDACTED]

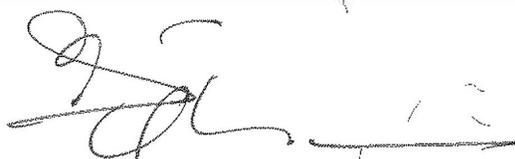
que podrá consultar el expediente en que se actúa en las oficinas de la Unidad de Cumplimiento de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 838, cuarto piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03100, (Edificio Alterno de este Instituto), dentro del siguiente horario: de lunes a jueves de las 9:00 a las 18:30 horas y los viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.

NOVENO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XV y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de [REDACTED] que la presente Resolución constituye un acto administrativo definitivo y por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 312 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, procede interponer ante los juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, el juicio de amparo indirecto dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO. Una vez que la presente resolución haya quedado firme, con fundamento en el artículo 177 fracción XIX de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con el artículo 36 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, inscribese la misma en el Registro Público de Concesiones, para todos los efectos a que haya lugar.

DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los artículos señalados en los Considerandos Primero y Segundo de la presente Resolución.



Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar
Comisionado Presidente



Ernesto Estrada González
Comisionado



Adriana Sofia Labardini Inzunza
Comisionada



María Elena Estavillo Flores
Comisionada



Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado



Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XX Sesión Ordinaria celebrada el 1 de julio de 2016, en lo general por unanimidad de votos de los Comisionados presentes Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar, Ernesto Estrada González, Adriana Sofia Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Teja.

En lo particular, la Comisionada Adriana Sofia Labardini Inzunza manifestó su voto en contra de los Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto, por lo que hace a la evolución para el cálculo de la multa impuesta; y voto en contra de fundamentar con los artículos 523 y 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, lo relativo a la pérdida de bienes en beneficio de la Nación.

La Comisionada María Elena Estavillo Flores manifestó voto concurrente en lo referente a la forma en que se determinó el monto de la multa impuesta.

Lo anterior, con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y II; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/010716/366.